

Reconfiguración de lo político en la gestión de desastres: un análisis de la “crisis de granizo” en Quebec (1998)

Catherine FOISY & Felipe DE ALBA

Centre for Interdisciplinary Studies in Society and Culture (CISSC) Concordia University & Centre d'Études et de Recherches internationales de l'Université de Montréal (CERIUM).

RESUMEN: Este artículo propone un análisis de las interacciones entre los Estados y las sociedades postindustriales en un contexto de gestión de crisis natural. Esta fundado en los conceptos de sociedad del riesgo (BECK, 2001) y de democracia dialógica (CALLON & *al.*, 2001), estudiamos una controversia tecno-científica en Quebec derivada de la “Crisis de granizo” (1998). Incluso si se supone que los ciudadanos desempeñan un rol esencial en el proceso de reconfiguración de la política en las democracias avanzadas, este rol es aún insuficiente y ello, porque el Estado resultó eficaz en la gestión de dicha crisis. Concluimos que dicho análisis permite destacar los desafíos sociopolíticos principales y los cuestionamientos relativos a la legitimidad del Estado contemporáneo en la gestión de las crisis naturales.

DESCRIPTORES: Crisis ecológica. Democracia. Gestión pública. Administración pública, Sociedad civil. Quebec (Canadá)

I. INTRODUCCION

A partir del análisis de un contexto caracterizado por una fuerte integración económica del sector energético en América del Norte, en este artículo buscaremos comprender el ejercicio democrático en las sociedades contemporáneas, particularmente en la gestión de riesgos. Intentamos un estudio particular de una controversia tecno-científica relativa a la gestión de la “Crisis de granizo” (*Crise de verglas*) en Quebec, ocurrida en 1998. Nos focalizamos sobre la

relación entre el Estado y los ciudadanos y cómo éstas se traducen en una armadura que nos refiere, a su vez, a una discusión sobre la democracia en las sociedades postindustriales. Dos preguntas guían este texto: ¿Qué conclusiones podemos sacar del estudio de la controversia tecno-científica derivada de la gestión de esta crisis natural, tal como ocurre en las sociedades occidentales? Podemos también preguntarnos sobre cómo los mundos políticos y técnico-económicos se combinaron para ‘bloquear’ la acción de los ciudadanos.

Recibido: 06.10.2008. Revisado: 01.12.2008
e-mail: foisy_catou@yahoo.ca; dealbamf@mit.edu

Agradecemos a los evaluadores anónimos de la Revista sus valiosos comentarios y referencias sobre el contexto más general de la reconfiguración de lo político, por medio de un enriquecimiento de la literatura consultada

Con este propósito, sostendremos una hipótesis, que intentaremos demostrar en dos *tiempos*. Por una parte, sostendremos que los ciudadanos desempeñan un papel esencial en el proceso de reconfiguración de lo político en las democracias postindustriales porque al apropiarse de un discurso tecno-científico, *politizan* la trama de relaciones de poder en dicha coyuntura. Por otra parte, consideramos que este papel es insuficiente principalmente porque el Estado ha resultado eficaz en la gestión de las crisis naturales, como una forma nueva de rearticulación de lo político, al menos en el caso de nuestro estudio.

A partir de un marco teórico sujeto a los conceptos de sociedad del riesgo de Ulrich Beck y de democracia técnica (o dialógica) propuesto por Michel Callon, realizamos un estudio exhaustivo de esta controversia local, desde el punto de vista de los argumentos tecno-científicos de los actores involucrados.

Como cuadro metodológico general, el análisis desarrollado aquí se funda en el recurso a diversos artículos de la prensa local y nacional que trataron el evento mismo, así como una revisión documental exhaustiva. Al respecto de ésta última, con el fin de tener en cuenta las opiniones de los actores, se analizaron dos tipos de reportes emitidos al respecto. Respecto a las posiciones y decisiones de la parte gubernamental, fueron consultados tres reportes principales: el *Informe Nicolet*, de la Comisión científica y técnica responsable de analizar dichos acontecimientos, así como el *Informe Warren*, resultado del Comité de expertos constituido por HydroQuebec para evaluar la gestión que dicha empresa hizo de la crisis del hielo. Finalmente, el *Informe de la Oficina de Audiencias Públicas* en medio ambiente (BAPE, por sus siglas en francés).

En relación con la parte ciudadana, recuperamos una serie de documentos presentados por la Coalición de los ciudadanos del Val Saint-François (CCSVF), en particular, dos reportes presentados respectivamente a la Comisión Nicolet y en las audiencias del BAPE. Esta documentación fue completada con la realización de cinco entrevistas semi-dirigidas con protagonistas-clave del CCSVF: los antiguos Presidentes (Monique Fournier y Jacques Laval) así como con los consejeros políticos (Alexis Boucher y Chantal Gareau), dos diputados provinciales que apoyaron el movimiento ciudadano y otros dos diputados (Bernard Brodeur). En tercera y última etapa,

buscamos confrontar nuestros datos recolectados, las hipótesis y el marco de análisis con las opiniones de una especialista en materia de controversias tecno-científicas, la Dr. Ève Séguin.

Todo este aparato documental nos permitirá articular nuestro entramado teórico en torno a las explicaciones propuestas por CALLON & *al.*, (2001) y por BECK (2001) sobre el tema de la reconfiguración de lo político, otorgando especial atención al papel del Estado y los ciudadanos en este proceso. En consecuencia, evaluaremos la pertinencia de los principales elementos de nuestro marco teórico enfrentándolos a los hechos destacados de nuestro estudio de caso. Finalmente, presentaremos los actores de la controversia así como sus antecedentes, los aliados de dichos actores, los recursos tecno-científicos movilizados y los argumentos del mismo tipo puestos en discusión.

2. TRAMAS TEÓRICAS

Es conveniente situar el propósito de nuestros dos autores, que forman parte de una extensa literatura que trata sobre los nuevos movimientos sociales, los conflictos medioambientales así como la reconfiguración de lo político en las sociedades postindustriales. Algunos otros autores han tratado el problema de la democracia contemporánea a partir de la manera en que los ciudadanos la viven y la interpretan, tanto sobre una base individual, colectiva como global, nacional o local (CLARK & HOFFMAN-MARTINOT, 1998), o en las relaciones que mantienen según valores post materialistas y propios de la sociedad postindustrial (BARNES, KAASE & *al.*, 1979), lo que nos permite afirmar que esta discusión está en el centro de los análisis de las 'motivaciones' de los ciudadanos en casos de decisiones de compromiso político (NORRIS, 1999).

En nuestra investigación hemos encontrado varios estudios de caso recientes sobre las nuevas formas del compromiso ciudadano, del activismo político y sobre los nuevos movimientos sociales (MCADAM & *al.*, 1996; NORRIS, 2001). No obstante, en lo que se refiere a las formas que adquiere este compromiso en las sociedades postindustriales (CLARK & REMPEL, 1997), el enfoque pertinente se funda en el concepto de la sociedad del riesgo, propuesto por Beck.

Igualmente podríamos decir que en cuanto a las transformaciones de la participación ciudadana en el plano local, algunos autores sugieren la instauración de un “cuarto poder” de los ciudadanos, cuya articulación con los tres poderes clásicos, permitirían la aparición de una forma mixta de la democracia, incluyendo los métodos representativos y directos o semidirectos (BACQUÉ & *al.*, 2005). Este último concepto nos parece sin duda interesante, pero los conceptos de subpolítica, como espacio del ejercicio democrático, así como la democracia técnica (o dialógica) nos han parecido más convenientes a nuestro estudio de caso.

Los conceptos y autores anteriores son pertinentes en la medida que muestran la riqueza conceptual y analítica del pensamiento de Beck y Callon *et al.* En dicho sentido, el interés del análisis dialéctico del presente estudio de caso reside principalmente en el uso de dos elementos. Por una parte, CALLON & *al.*, (2001) fundan su argumentación en un análisis de los procedimientos de democratización de “lo que está en juego” (*enjeux*) en el plano tecnológico, lo que nos remite a suponer que la reconfiguración de lo político en las democracias postindustriales requiere situarse en el centro de la discusión.

Por otra parte, el planteamiento propuesto por Beck se base en una tentativa de conceptualizar, en su idea de sociedad del riesgo, las transformaciones sociales, económicas y políticas vividas por las sociedades postindustriales, donde las tecnologías se encuentran en el centro de dichos cambios. Creemos que es a través de este esfuerzo de conceptualización que el autor examina la reconfiguración de lo político, construyendo nuevas pistas sobre el cambio de lo político basada en cuatro tesis distintas, que analizaremos con detalle enseguida.

2.1. Principales postulados de Beck

En primer lugar, según Beck, la relación entre cambio social y gestión política en la sociedad industrial se encuentra en función de un modelo de “ciudadano dividido”. Por una parte, se atribuye al ciudadano un derecho democrático en todos los lugares de formación de la voluntad política. Del otro

lado, se le presenta como burgués donde prosigue estrictamente sus intereses privados en los ámbitos del trabajo y de la economía. Este modelo se funda en un sistema político administrativo y en un sistema técnico-económico dado a particulares. Esta primera tesis, ilustrada por la noción de *sociedad de riesgo*, es pilar de las otras tres tesis restantes.

“La sociedad industrial provoca una coincidencia de dos procesos contradictorios de organización de la transformación social-la institución de la democracia político parlamentaria y la institución de una transformación social apolítica, no democrática, legitimada por las palabras clave de progreso y de racionalización” (BECK, 2001: 402).

En segundo lugar, Beck se basa en el hecho de que en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, el proceso de innovación permanente que es la modernidad reposaba en dos condiciones históricas. *Una*, la evidencia social de desigualdades de la sociedad de clases que da sentido a lo político y su impulso a la construcción del Estado social. *Dos*, y en consecuencia, la potencia de la transformación de fuerzas productivas y del proceso de “cientificación” o “tecnificación” no sobrepasaban las posibilidades de acción política ni suprimían los fundamentos de legitimación del modelo del cambio social. Según Beck, este cambio social se efectuaba bajo la forma de lo no político, pero en paralelo con el mundo político institucionalizado.

En tercer lugar, hay una progresiva eliminación de las fronteras de la política en dos planos. Por una parte, los derechos, una vez ratificados y que se han convertido en conscientes, limitan el margen de maniobra dentro del sistema político. Como contrapartida, favorecen la aparición de nuevas aspiraciones de participación que se expresan *fuera* del sistema político y toman la forma de una nueva cultura sociopolítica (iniciativas ciudadanas, movimientos sociales).

Por otra parte, al representar un mayor potencial de transformación y de amenaza, la evolución técnica-económica pierde de su carácter no político. Al inscribirse en las categorías de la política y de la no política, se constituye en la tercera instancia nombrada

“sub-política”, dónde la amplitud de las transformaciones sociales *en movimiento* crecen de manera contrariamente proporcional a la legitimación. En consecuencia, cuando los ciudadanos se inscriben *fuera* de las instituciones políticas reconocidas y se comprometen en la sub-política, adquieren medios para cuestionar el Estado y sobre todo, la legitimidad de sus acciones.

En cuarto lugar, el potencial de cambio social se transforma radicalmente, dejando al sistema político para instalarse en la sub-política de la modernización científico-técnica-económica. Se observa entonces una inversión precaria de la política y de la no política: la política se vuelve apolítica, y lo que era apolítico se vuelve político. Por ejemplo, antes la acción de los empresarios, concentrada en la esfera técnica-económica, se daba por no política o apolítica. En la actualidad, la continuación de intereses financieros en la esfera técnico-económica —basada en las techno-ciencias— puede comprender, en sus aplicaciones, a la vez de la no política y de la política. Esta última tesis en realidad es el punto central de la reflexión política contenida en la *sociedad del riesgo*:

“Al fomentar y al garantizar el “desarrollo económico” y la “libertad científica”, se compromete sobre un terreno resbaloso: la primacía en la construcción política descendiende del sistema político democrático hacia el mundo democráticamente no legitimado de la no política económica y técnico-científica. Llegamos a una revolución disfrazada de normalidad que escapa a las posibilidades de intervención democrática, pero cuya opinión pública convertida en crítica reclama ser justificada y ratificada por las instancias democráticas” (BECK, 2001: 406).

El autor destaca su posición con relación a la democratización de ‘lo que está en juego’ (*enjeux*) en el plano techno-científico y con relación a la reconfiguración de la política en las sociedades postindustriales. Para Beck, los ciudadanos deben desafiar el mundo político y politizar el mundo apolítico apostando al espacio de la sub-política para democratizar ‘lo que está en juego’ en el plano techno-científico y participar en el proceso de reconfiguración de la política.

2.2. Principales postulados de CALLON, LASCOUMES y BARTHE

Por su parte, CALLON & *al.*, (2001) defienden la tesis según la cual el compromiso de los ciudadanos en controversias tecno-científicas permite la apertura a nuevos estados de *un mundo posible*. Para los autores es necesario buscar procedimientos que permitan superar la democracia delegativa por una democracia dialógica (o democracia técnica). Es necesario desarrollar procedimientos, sobre una base sistémica y sistemática, permitiendo “democratizar” la democracia.

La democracia delegativa se basaría, según estos autores, no en un modelo conceptual donde se divide al ciudadano, sino sobre dos aspectos: primero entre los profanos y los científicos, luego entre los representados y los representantes políticos. Así, en las controversias tecno-científicas, los ciudadanos se apropian de nuevo de dos espacios: el de los profesionales del universo tecno-científico y del ‘lugar’ de los políticos con poder de decisión. En dicho sentido, el proyecto de la democracia dialógica se caracteriza por una *reunificación del individuo* en el espacio político en torno a su calidad de ciudadano y por el reconocimiento de las potencialidades de las cuales ellos son portadores.

En la base de este proyecto político, encontramos el diálogo, el intercambio y la capacidad de escuchar, lo que permite construir identidades en los distintos actores de la controversia y permite explorar nuevas posibilidades. Aunque los autores reconocen el carácter central del conocimiento en las controversias tecno-científicas, añaden que no se puede tener en cuenta sólo un tipo de saber. En la medida en que las controversias abren el debate sobre la perspectiva de acciones inéditas —por esta multiplicación de *estados de un mundo posible*—, representan un factor de enriquecimiento fundamental de la democracia.

Este enriquecimiento de la democracia se concreta por dos vías fundamentales. En primer lugar, en el proceso de decisión es importante no decidir intempestivamente, sino tomar el tiempo antes de decidir, para explorar todas las otras opciones posibles. En segundo lugar, el reconocimiento que nuevos mundos son posibles nos refiere a las

maneras de ver y pensar el mundo en las cuales los políticos y los profesionales de las tecno-ciencias no habían pensado antes. El extracto siguiente ilustra este tipo de transformaciones: “el saber-hacer como el voluntarismo político, cuando toman la forma de un discurso de autoridad, fallan respecto a las interrogaciones y las respuestas que esperan los ciudadanos” (CALLON & *al.*, 2001: 49).

2.3. Articulación de dos puntos de vista

Según Beck, la democratización del plano tecno-científico en las sociedades postindustriales es el resultado de la necesidad de legitimar las decisiones y sirve, a su vez, para dar fundamento político a cuestiones de carácter técnico-económico y tecno-científico. Desde este punto de vista, la sub-política es en realidad un ‘cambio de lugar’ de la política derivada de la acción de los movimientos sociales y de las iniciativas ciudadanas. Callon, Lascoumes y Barthe, y Beck consideran como una necesidad el institucionalizar este tipo de prácticas ciudadanas, por parte de las democracias postindustriales. Aquí podrá percibirse más bien la necesidad, para los ciudadanos y los actores de la sociedad civil, de hacerse oír y de entablar debates sobre “lo que está en juego” (*enjeux*) en los planos tecno-científicos al interior de la sub-política.

Para CALLON & *al.*, (2001), parece fundamental mejorar la democracia haciéndola pasar de un método delegativo actual hacia un método “más técnico”, o incluso “más dialógico”. Los autores reconocen también la necesidad de legitimar las decisiones tomadas en el ámbito tecno-científico, pero *a partir de instituciones políticas* donde los ciudadanos tienen un lugar preciso. Con este fin, los autores enfatizan sobre la construcción de nuevas identidades e insisten sobre la contribución crucial de los ciudadanos ‘profanos’ en los procesos políticos referidos al plano tecno-científico. Esta contribución de los ‘profanos’ debe realizarse en el marco de estructuras mejoradas y más flexibles desde el punto de vista procesal. Para los autores, estas experiencias de democratización en el plano tecno-científico deben contribuir a una reflexión general sobre la *democratización de la democracia*.

Con respecto al carácter central de la economía (y del mercado) en el surgimiento de las controversias, los dos autores proponen explicaciones diferentes. Para Callon, Lascoumes y Barthe, lo que refuerza el mercado y los complejos técnicos-económicos, es la democracia delegativa. Por lo tanto, al actualizar los ‘estados del mundo posible’, se podría definir públicamente los vínculos que unen los mundos de la política y de las tecno-ciencias. Además, los autores consideran que los hechos científicos son socialmente contingentes y que los científicos que producen resultados de investigación poseen intereses, poco importa su naturaleza. Por su parte, Beck afirma que el cambio del marco de la sub-política *por* los ciudadanos permite legitimar o no, sobre una base política, el proyecto técnico-económico y tecno-científico inscrito en el centro de la sociedad del riesgo.

De esta manera, después de haber referido los fundamentos teóricos de nuestra reflexión, procederemos al análisis de la controversia con el fin de destacar los principales elementos en juego en el plano sociopolítico y los cuestionamientos relativos a la legitimidad del Estado contemporáneo ante la gestión de las crisis naturales.

3. UNA COMPRENSIÓN DE LAS CONTROVERSIAS TECNO-CIENTÍFICAS Y DE LA GESTIÓN DE CRISIS NATURALES POR EL ESTADO

3.1. Reconfiguración de lo político

En esta sección se intenta demostrar que, desde hace algunas décadas, en el proceso de reconfiguración de lo político que viven las sociedades postindustriales, la contribución de los ciudadanos es esencial pero insuficiente, debido a la apropiación que hacen del discurso tecno-científico y los elementos que pone en juego. Esto permite cuestionar a la vez el modelo de comprensión del proceso formulado por Beck y el proceso formulado por CALLON & *al.*

La acción de los ciudadanos en nuestro caso de estudio corresponde, en el modelo propuesto por Beck, a un ‘entremedio’. Es decir, los ciudadanos modificaron el espacio de la sub-política apropiándose de un discurso de naturaleza tecno-científica sin descuidar, al mismo tiempo, los espacios

políticos tradicionales. Forzaron los espacios políticos institucionales (parlamento, ejecutivo gubernamental, representantes políticos) a pronunciarse sobre dicha controversia. La raíz de esta ambivalencia es que una concepción positivista del concepto de progreso técnico-económico-científico es muy fuerte, tanto en los medios tecno-científicos como en los de la política. Dicha concepción permite legitimar decisiones que se revelan en contradicción con los intereses de los ciudadanos que corren el riesgo de vivir las consecuencias cotidianas.

La controversia estudiada aquí ilustra la relación que Callon, Lascoumes y Barthe establecen entre el mercado y la democracia actual que definen como democracia delegativa. Desde su punto de vista, al poner al día los *estados de un mundo posible* se podrían identificar las dinámicas, tomando sus raíces en el mercado, que vinculan los distintos actores interesados. Preguntémonos si el simple hecho de enfrentar los representantes políticos con los científicos habría permitido hacer surgir los intereses a menudo subyacentes de los distintos grupos sociales. En el caso que nos interesa, esta técnica se habría revelado quizá más costosa que eficaz. En dicho sentido, hay que establecer nuevos espacios que inscriban las relaciones de fuerza no en los canales tradicionales de la política, sino en los espacios que están al margen, es decir, en la sub-política, por ejemplo. Sin eso, toda tentativa de renovación de la relación entre el crecimiento económico y la política en el seno de las sociedades postindustriales corre el riesgo de seguir siendo estéril.

Uno de los problemas principales del ingreso de los ciudadanos en el espacio de la sub-política revela que este espacio no institucionalizado conserva un carácter un tanto marginal. Al mismo tiempo, este ingreso a la sub-política permite a los ciudadanos cuestionar la legitimidad de las decisiones tomadas por el Estado, de acuerdo con los sectores tecno-científicos y económicos. Tal como lo proponen Callon, Lascoumes y Barthe, sin un esfuerzo constante de institucionalización, será difícil o incluso imposible, elaborar un proyecto democrático adecuado en la gestión de crisis naturales. Con la reunificación del individuo en el espacio político en su calidad de ciudadano y con el reconocimiento de sus

potencialidades, el proyecto de la democracia dialógica permitiría responder a los retos centrales de la sociedad del riesgo. ¿En efecto, cómo refundar la legitimidad política sobre bases ampliadas, permitiendo la inclusión de nuevos actores, pero sobre todo, con la aparición de nuevas relaciones entre estos últimos y los actores políticos tradicionales?

3.2. Gestión de la crisis natural y legitimidad del Estado

El factor determinante en la gestión de las crisis naturales fueron los apoyos incondicionales del Estado a las decisiones y a las propuestas del promotor público. Siete decretos gubernamentales permitieron hacer caso omiso de las disposiciones legales que obligaban a todo promotor a defender su proyecto públicamente y explicar a la población los riesgos potenciales. Como veremos más tarde, el poder político del que disponía el promotor público más que los argumentos tecno-científicos que pudo presentar, determinaron la solución de la controversia.

Por otra parte, destacamos la fuerza manifestada por el Estado en la gestión de esta crisis mientras que mantuvo, por medio del promotor público, los mismos argumentos de protección de la red eléctrica a lo largo de la controversia. Estos argumentos, alegados tras la crisis natural vivida por la población de Quebec, incrementaron la legitimidad concedida al Estado. Solo frente de los ciudadanos, cuyo planteamiento se inscribía en primer lugar en la sub-política, el Estado se presentaba fácilmente como el portador legítimo de la voluntad colectiva y el encargado del bien común. En esta medida, se volvía más fácil e incluso legítimo actuar de manera ejecutoria como fue el caso.

Si los ciudadanos estuvieron en condiciones de obstruir los trabajos de manera importante, ganando al mismo tiempo la simpatía del público, así como una relativa disposición de las instancias de toma de decisiones (Estado, representantes políticos y promotores), se debe a que estos últimos incluían y hablaban el lenguaje técnico y científico requerido. Sin aliados y sin poseer una competencia técnica y científica, habría sido sencillamente imposible establecer una verdadera actitud de fuerza frente al Estado o al promotor público.

Como contrapartida, en cuanto los representantes del promotor público comprendieron que los ciudadanos manejaban el *dossier* en su mismo lenguaje, mantuvieron el silencio como táctica política, lo que significó un deterioro de la relación de fuerza que los ciudadanos habían creado en la coyuntura de esta controversia. No obstante, es necesario destacar otro factor que minimiza el impacto del control ciudadano. Se trata de la mirada positiva que sobre el proyecto y sus resultados científicos tenían tanto los funcionarios gubernamentales y los diputados de Quebec, como los expertos y científicos entrevistados durante las comisiones parlamentarias referentes a la protección de la red de distribución eléctrica.

Estos factores que determinaron una solución a la controversia nos permiten cuestionar, en particular, las ideas de Callon, Lascoumes y Barthe dado que la democratización en los planos tecno-científicos públicos resulta más trascendente que una simple transformación de los procedimientos y procesos democráticos, como estos autores lo sugieren. No es invitando ciudadanos a sentarse alrededor de una mesa y teniendo en cuenta sus conocimientos no científicos o en el plano tecno-científico que la sociedad va a democratizarse. La controversia presenta muy claramente la necesidad, para los ciudadanos, de participar en este “*no man’s land*” político donde los promotores técnico-económicos, respaldados por los ejecutivos gubernamentales, deciden y actúan según los criterios del progreso técnico-económico-científico. En este sentido, la conceptualización que propone Beck de la democratización en el plano tecno-científico por medio de esta tercera instancia que es la “sub-política”, se acerca aún más de la realidad expuesta por el estudio de esta controversia. Mientras que los ciudadanos participaron en niveles donde fueron calificados, a primera vista, de apolíticos. Así, politizaron los elementos en juego y, en cierta medida, contribuyeron a democratizar el proceso de decisiones que rodeaban estas cuestiones a las cuales se enfrenta a las sociedades postindustriales. Ahora veremos con detalle nuestro estudio de caso.

4. EL ESTUDIO DE CASO

El 5 de enero de 1998, el suroeste de la provincia canadiense de Quebec fue devastada por tres olas sucesivas de lluvias con altas dosis de granizo (*verglas*) que dejaron la mayor parte de las redes de transporte y distribución eléctrica en un estado de deterioro. La gravedad de esta crisis natural sobre los ciudadanos fue también sin igual: 27 muertes, 3,2 millones de personas privadas de electricidad, incluidas algunas por más de un mes y esto, en pleno invierno canadiense (LAGADEC, 2000: 38). Casi un mes después del acontecimiento, se dio una fuerte respuesta del Gobierno de Quebec y su empresa estatal (HidroQuebec, HQ) de manejo de la electricidad. En el contexto de la gestión de esta crisis, el Gobierno y dicha empresa anunciaron la instauración de una nueva línea eléctrica de alta tensión (735 KU) que se destinaría a la protección de la red de Montreal y Montégérie en caso de otra posible tormenta. Lo que no interesará destacar aquí es cómo esta última decisión suscitó una controversia tecno-científica que opuso al Gobierno y la empresa HQ contra un grupo de ciudadanos movilizados en torno a dicha decisión. Para poder abordar nuestro objeto, tendremos que dar algunos elementos del contexto histórico.

4.1. Actores, historia y recursos movilizados

HidroQuebec se fundó como empresa estatal en 1944 bajo el Gobierno liberal de Adélard Godbout a partir de la nacionalización de la empresa *Montreal Heat & Light Power*. En 1963, su carácter público se confirma con la nacionalización completa de las compañías de hidroelectricidad de la provincia, auspiciada por René Lévesque, el entonces Ministro liberal de Recursos naturales. La empresa estatal se convierte rápidamente en una palanca económica colectiva que facilita la instauración de un Estado fuerte en Quebec. HidroQuebec favorece también el desarrollo y un sentimiento de pertenencia y éxito colectivo de los quebequenses¹.

¹ Los avances técnicos de la empresa colocan la mano de obra y los conocimientos técnicos de Quebec entre los líderes de

la industria eléctrica a nivel mundial.

Rebasando sus ingresos anuales en más de mil millones de dólares desde el año 2000, HydroQuebec tomó, a partir del ejercicio financiero 1994-1995, un giro *business* orientado a la exportación de hidroelectricidad hacia Ontario (una provincia canadiense vecina, la capital económica del país) y hacia algunos estados americanos del noreste. Todo ello ocurrió bajo el Gobierno de Lucien Bouchard (y el liderazgo de André Caillé, antiguo PDG de Gas Metro) que fue contratado entonces como PDG de HQ. En el contexto de austeridad presupuestaria¹ de los años 1996 a 2000, el reporte mercantil que vincula HydroQuebec como empresa estatal con el Gobierno se intensificó, porque el objetivo era alcanzar rendimientos elevados.

A partir del anuncio de la línea de alta tensión, el Gobierno adopta un primer decreto que permite a HQ avanzar en una sección de dicho tramo conocida como Des Cantons-St-Césaire. Este último retira al promotor la sujeción a las normas habituales de evaluación medioambiental. En vez de confiar el mandato de evaluación del impacto medioambiental a la Mesa de las audiencias públicas en la materia (BAPE, por sus siglas en francés), el Gobierno encarga a HQ “consultar” al público sobre esta primera etapa de la protección de la red y evaluar sus opiniones sobre dicho proyecto.

Además, el decreto viola la ley sobre la ordenación del territorio, ultrajando las responsabilidades de la municipalidad (MRC, por sus siglas en francés), lo que derivó en la adopción y en la aplicación de un esquema de adaptación de su territorio. Esta decisión permitiría comenzar la expropiación de propiedades con el fin de empezar las construcciones necesarias para una respuesta adecuada a la urgencia de la situación.

Al mismo tiempo, se crean dos comisiones. Por una parte, se confía al Comité Blanchette el mandato de evaluar las dos partes restantes del proyecto de cierre de la región de Montégérie. Por otra parte, para aclarar los acontecimientos y reflexionar sobre posibles acciones en caso de otras posibles crisis, el Gobierno establece la Comisión

científica y técnica encargada de estudiar la tormenta de granizo, dicha comisión fue presidida por Roger Nicolet.

En febrero de 1998, el consejo de administración de HQ elige un Comité de expertos formado por 13 ingenieros del Canadá, Estados Unidos, Alemania y Noruega, que fue presidido por Roger Warren, y que tenía el objetivo de evaluar la tormenta y las acciones realizadas por la empresa estatal (HQ). Es en ese momento que los ciudadanos propietarios que fueron consultados por HQ para la expropiación de sus tierras deciden movilizarse, en particular, en las regiones de Granby y el Valle St-François. Entonces fundan la Coalición de ciudadanos y ciudadanas del Valle Saint-François (CCVSF), una organización ciudadana que llevará la batuta en este expediente.

Durante el otoño, se deposita el Informe Blanchette, que implicará la emisión de dictámenes que reúne la opinión de expertos, técnicos y científicos, y en el cual se afirma que “el trazado propuesto no es el de menor impacto” y se consideraba que “las situaciones de urgencia no deberían considerarse como catalizadores que conduzcan a decisiones que limiten el derecho a la democracia participativa”. (FRANCOEUR, 1998: A8). El 24 de noviembre de 1998, HQ obtiene su primera victoria sobre la CCVSF en el Tribunal Superior de Quebec. Tras esta primera derrota, los miembros de la CCVSF deciden apelar el veredicto. Esta decisión es el principio de una larga batalla jurídica, de la parte ciudadana, contra los decretos gubernamentales a decidir en casos de urgencia medioambiental. En abril de 1999, se deposita el Informe Nicolet. A partir de este informe, las dos partes involucradas apoyan sus opiniones respectivas en un discurso tecno-científico. A finales del año 1999, el Gobierno adopta la ley 42, una ley especial para proteger los trabajos ya realizados. Este gesto conduce a los miembros del CCVSF a impugnar una vez más ante los tribunales las maniobras poco democráticas del Gobierno.

En el mes de enero de 2001, el BAPE indica a HQ que debe reformular sus acciones

² En marzo y octubre de 1996, el gobierno de Lucien Bouchard invita a miembros de la sociedad civil a una mesa de negociación para encontrar soluciones socioeconómicas al déficit

que tenían las arcas del gobierno quebequense. Como resultado de ello, el gobierno quebequense se compromete a una serie de medidas con el fin de alcanzar un estado de “cero déficits”.

relativas al proyecto de línea entre St-Césaire y Hertel. La comisión se interroga seriamente sobre “la necesidad de esta línea y sobre la potencia propuesta para asegurar la alimentación del centro y el oeste de Montreal, así como de una parte de la orilla meridional”. (FRANCOEUR, 2001: A3). Algunos meses más tarde, en agosto de 2001, los miembros del CCVSF pierden otra vez contra el Gobierno y HQ en su contestación jurídica de la ley 42.

Entre los aliados de HQ figuran los siguientes grupos: El ejecutivo del Partido Quebequense y el gobierno (en particular, la Oficina de Primer Ministro), una coalición patronal de los sectores de construcción y de electricidad, así como los expertos del Comité Warren.

Por su parte, los ciudadanos movilizados en este movimiento contaron con el apoyo de cerca de 75 organizaciones que representaban cientos de millares de personas resultantes de los sectores públicos, para-públicos y no gubernamentales, tanto a nivel regional como nacional y procedente incluso de los Estados Unidos. Algunos de ellos fueron: la Reagrupación de los Consejos Regionales del Medio Ambiente de Quebec (RNCREQ, por sus siglas en francés), la Asociación de Quebec para el patrimonio industrial (AQPI), el Gran Consejo de los Gritos, la Federación Nacional de las Asociaciones de Consumidores de Quebec, el Colegio de Abogados, la Oposición Liberal Oficial (con Christos Sirros a la cabeza), la Unión de las municipalidades de Quebec (UMRCQ), principalmente.

En términos de recursos tecno-científicos movilizados, la empresa estatal (HQ) pudo contar con el conocimiento de sus ingenieros, con los conocimientos de los expertos del Comité Warren, cuya reflexión se abastecía con las presentaciones del personal de HQ, así como el peritaje del Instituto de investigación sobre la electricidad de Quebec (IREQ). En lo que se refiere a las condiciones meteorológicas que rodeaban la crisis de granizo, HQ se sirvió de los datos proporcionados por el ministerio de Medio Ambiente de Canadá (*Environnement Canada*), que proporcionaba a la empresa una serie de presentaciones de expertos en el Comité Warren.

En cambio, los miembros del CCVSF se basaban principalmente en la movilización del conocimiento científico de dos expertos. El primero, Brian White, un antiguo ingeniero consultor externo de la empresa estatal (HQ), que era el diseñador de los postes “V-Guía” que sirvieron para construir el tendido eléctrico metropolitano de Montreal y una parte de las líneas de distribución de la región de Montréal, los cuales funcionaban sin problemas desde hacía 25 años. Este experto contactó los miembros de la CCVSF cuando su lucha fue dada a conocer y les informó sobre la cuestión de la caída de la red. El segundo experto era un antiguo ingeniero, también consultor externo de HQ especializado en la red de distribución, que conocía todo lo referente al proyecto de nueva línea de distribución.

Además, los ciudadanos agregaron a dicha gama de expertos, consultas frecuentes a la biblioteca de HQ, para efectuar investigaciones sobre su caso, justo hasta el momento que la empresa los detecta y los expulsa de sus instalaciones. En general, sobre la cuestión de la alimentación de la red y de su interconexión, fueron dos ingenieros de la empresa Hidro Ontario que les proporcionaron la información necesaria.

4.2. Los argumentos tecno-científicos

Desde un ángulo tecno-científico la controversia se refería a dos elementos precisos. Por una parte, las explicaciones relativas a la caída de las líneas de transporte y a la depresión de los postes son centrales. Por otra parte, es fundamental tener en cuenta lo que cada una de las partes implicadas tenía que decir sobre la protección de la red.

4.2.1. Los argumentos de la empresa HidroQuebec

Por lo que se refiere a la caída de las líneas de distribución y de los postes de electricidad, las líneas se hacían, según HQ, para soportar una carga de 35 mm. de granizo radial mientras que, durante la tempestad de granizo, cayeron 45 mm³.

³ El adjetivo «radial» significa la carga de hielo (granizo) que

queda alrededor de un cable después de una tormenta.

En el informe Warren, los expertos de HQ afirmaban que la carga de hielo radial máxima en la zona afectada era de 75 mm., las precipitaciones de granizo en la misma zona alcanzaron 80 mm., o más. La empresa HQ y sus expertos llegaron a la conclusión que fue el efecto combinado de la carga radial de granizo y de la fuerza de los vientos que hicieron ceder las líneas de distribución eléctrica en Montérégie. El peritaje en el cual se fundaron estos datos es una técnica que tenía ya 23 años en enero de 1998: la lectura de los pluviómetros, que consiste en medir la carga radial de granizo que cae sobre el tendido eléctrico comparando estos datos con la cantidad de granizo que cayó en los árboles circundantes, con el fin de evitar todo resultado atípico.

En lo que se refiere a la protección de la red, el argumento básico de la empresa estatal era la urgencia de actuar para asegurar la red ante otros eventuales siniestros. En dicho sentido, puede afirmarse que el informe Warren da el tono al discurso de HQ y a su argumentación tanto ante los ciudadanos movilizados como al Gobierno o al público en general. Con respecto a los proyectos aprobados (julio de 1998), la empresa afirmaba: “En opinión del Comité, no solamente los proyectos aprobados (ej.: el proyecto de cierre de la región de Montérégie) mejorarán la fiabilidad de la explotación diaria corriente, sino que constituyen también refuerzos esenciales que representarán una mejora sustancial si fuera necesario enfrenar una tormenta de granizo comparable a la de enero de 1998” (HIDROQUEBEC & TRANSÉNERGIE, 1998: 17).

Un año más tarde, en la Comisión parlamentaria encargada de estudiar la protección de la red de distribución eléctrica, los representantes de HQ insistieron en las razones siguientes para justificar el proyecto de línea a 735 KV Hertel-Des Cantons:

- Dotar el puesto Hertel de una fuente adicional de 2000 MW procedente de un eje geográficamente distinto;
- Dotar a la región de Montérégie de una fuente de alimentación adicional, procedente de un eje geográficamente distinto, en caso de fallo del pasaje

Boucherville Saint Césaire, como fue el caso en enero de 1998.

Con el fin de justificar la necesidad de esta línea, la empresa presentó la problemática de la red y sobre todo, los cambios necesarios que se imponían tras la tormenta de granizo. El puesto Hertel, que servía a una gran parte del centro y el Oeste de Montreal así como una parte de la Rive-Sud, se conecta al área metropolitana a 735 KV y dispone, como fuente de alimentación principal, de una única línea a 735 KV desde Nicolet. Adicional a la pérdida de esta línea como de las líneas de 735 KV que conectaban el puesto Hertel con el área metropolitana, parecía comprometerse la alimentación de las cargas de electricidad del puesto Hertel, según la empresa. La alimentación del corazón del Montérégie procedía de una única fuente. El puesto de Saint-Césaire de 230-120 KV obtiene él mismo su alimentación de un único puesto —el de Boucherville de 735-230 KV— por medio de dos líneas de 230 KV agrupadas en un único pasillo de cerca de 45 kilómetros de longitud. La caída de una de estas líneas privaría de electricidad el corazón del Montérégie como ocurrió durante esta tempestad de granizo, en enero de 1998 (HIDROQUEBEC, 1999: 154-78).

Por lo tanto, la solución recomendada por *TransÉnergie*⁴ y elegida por HQ consistió en construir una línea de 735 KV entre el puesto Des Cantons y el puesto Hertel pasando por la Montérégie, donde un nuevo puesto a 735-120/230 KV sería construido. Según la empresa estatal, las ventajas de esta decisión son numerosas. Esta línea permitiría proporcionar 735 KV a la Montérégie. En el caso que el puesto Des Cantons perdiera sus fuentes de alimentación, la región dispondría de una fuente adicional en un diferente eje para asegurar la alimentación de las 140.000 personas que viven en la región de la Estrie. La construcción del puesto del Montérégie y su conexión a la línea Acton-Hériot, permitiría asegurar la alimentación de las 125.000 personas de la región de Drummondville en caso de fallo del pasillo que conecta el puesto Nicolet al puesto Hériot. La integración de la red regional del puesto del Montérégie permite el circuito de la red 120 KV de Montérégie, lo que

⁴ *TransÉnergie* es la filial de la empresa Hydro-Québec

encargada de la distribución de la electricidad.

favorecería el mantenimiento de la alimentación de las zonas de consumo regionales en caso de acontecimiento meteorológico grave. Finalmente, la línea Hertel-Montérégie-Des Cantons permite añadir un nuevo vínculo a 735 KV entre las regiones de Quebec y Montreal. Así pues, en caso de fallo del pasillo conectando el puesto del Nicolet a la región de Montreal, el pasillo Hertel-Des Cantons podría garantizar la relación (FIG 1).

4.2.2. Los argumentos de la Coalición de Ciudadanos de Val St-François

Respecto a la explicación de la caída de las líneas y postes, los ciudadanos (CCVSF) replicaron a la empresa estatal con una argumentación sólida. A su modo de ver, las líneas eran capaces de para soportar la carga radial de granizo que se acumuló. En su dictamen, HQ mintió dado que afirmaba que había caído en la región 90 mm. de granizo y que como las líneas fueron hechas para soportar 45 mm., estaba claro que estos

últimos se habían derrumbado debido a una carga de granizo demasiado alta. HQ y sus ingenieros omitían, en sus informes, pronunciar el adjetivo “radial” tras la palabra “carga de granizo acumulada”. Según el análisis del grupo ciudadano, 45 mm. de granizo era equivalente a 120 mm. de granizo, lo que no corresponde a la realidad de las precipitaciones que esa ocasión cayó. Para ilustrar su argumentación, la CCVSF sustentó que había ocurrido un hundimiento prematuro de las dos líneas que conectaban Boucherville a St-Césaire, aún cuando se habían renovado un año antes. Hay que señalar que se hace mención de los aisladores más o menos viejos y otros accesorios más o menos fiables, así como de la caída un tanto prematura de la línea en cuestión (INFORME WARREN, 1998: 21). La CCVSF puso en duda los reportes de HQ pese a los conocimientos de sus expertos, así como por la aplicación de la norma de Pi, que servía para calcular la carga radial de granizo caído.

Con el fin de referirse a la cuestión de la protección de la red, los ciudadanos construyeron su argumentación inspirándose

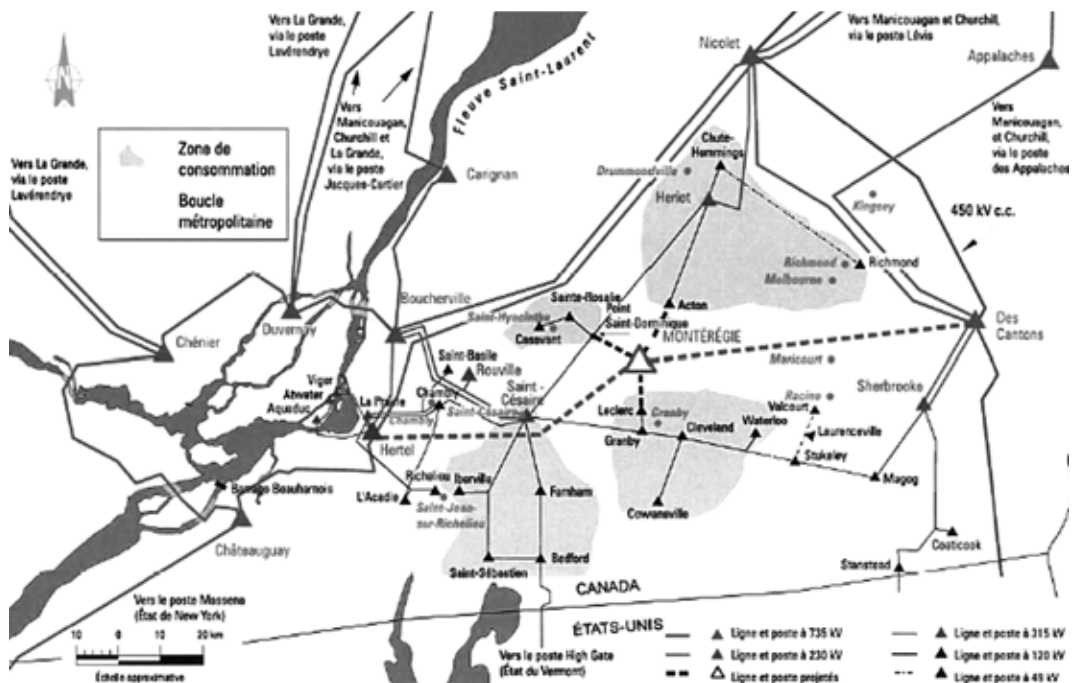


FIG. 1. Las etapas 2 y 3 del area de la Montérégie:Tramo St Césaire-Hertel y el puesto de la Montérégie.

Fuente: Adaptado del documento PR3, figura 4 (BAPE, 2000: 15).

en la retórica de la empresa estatal basada en la supuesta urgencia de la situación. Así, con la ayuda de expertos, elaboraron una solución que se enunciaba de la siguiente manera: “(Es necesario) La construcción de pequeñas centrales que funcionen con gas y produzcan 100 MW cada una, distribuidas en el territorio entre St-Césaire y Montreal. Las centrales hidroeléctricas costarían entre 3.000\$ y 4.000\$ por KW producido, mientras que una central que funciona con gas costaría 300\$ el KW. Lo que quiere decir que con el mismo presupuesto que HQ asignaría a la construcción de la línea Hertel-Des Cantons, se podrían construir un conjunto de centrales que funcionarían con gas y que darían un total de 1000 MW, una proporción de 1:10. En todo caso, recordemos que aquí nos referimos a una situación urgencia y no de alimentación corriente. Entonces, la justificación de la CCVSF era la siguiente:

- No a una línea peligrosa de 735 KV, nada de postes, nada de desfigurar el territorio, nada expropiación;
- El impacto en la salud sería claramente menor;
- Se construirían centrales eléctricas permanentes, *in situ*, en el sur, cerca de los grandes centros de consumo (ciudades);
- Las centrales se conectarían a los puestos de distribución y serían independientes del estado de las líneas de transporte eléctrico, en particular, serían más grandes, 735 KV, 315 KV y 230 KV;
- Los costes serían extremadamente competitivos comparados con los de la hidroelectricidad. En realidad, 10 veces menos costoso (300\$ KW/h instalado contra 3000\$ por el KW/h);
- Menor dependencia de la red de transporte que es manifiestamente muy vulnerable: el hielo no puede hacer caer una central al gas.” (CCVSF: 1998, 3)

Esta solución de reemplazo, defendida por los ciudadanos, toma su fuente en la siguiente reflexión: “HQ tiene una muy completa red de base, pero vulnerable. Es necesario mantenerla y renovarla como es debido. Por el contrario, esta red no se equipa de ayuda y los consumidores no tienen la

seguridad a la cual tienen derecho en toda red eléctrica”⁵. Podríamos, a pesar de todo, cuestionarnos sobre el impacto medioambiental de estas centrales que trabajarían con gas y preguntarnos si no habrían levantado un clamor de indignación por lo menos comparable al de la línea Hertel-Des Cantons.

Además, los ciudadanos consideraban, con ayuda del experto en redes eléctricas, que el puesto Saint-Césaire no tenía necesidad de conectarse a esta línea de 735 KV, puesto que simplemente con una línea de 230 KV o dos de 230 KV, colocadas en los corredores de las líneas de 120 KV se aseguraría la electricidad que iría desde Des-Cantons, cerca de Magog, a la red de la región de la Montérégie.

A partir del consentimiento de Jacques Laval, el antiguo portavoz de la CCVSF, la organización sostenía: “Resumidamente, había de que ocupar los pasillos existentes simplemente cambiando las líneas”. En cuanto al puesto Hertel no había necesidad de reforzarlo, ellos proponían cerrarlo y hacerla una red de transporte que hiciera converger todas las líneas de potencia en torno a sí misma. Esta última fue capaz de transportar la electricidad incluso con recalentamiento, lo que ocurrió durante la tormenta. Por lo tanto, resultaba inútil, contrariamente a esto que protestaban arriba y fuerte HQ y sus representantes, de reforzar el puesto Hertel.

4.3. Cierre de la controversia

A lo largo de la controversia, tuvieron lugar reuniones a puerta cerrada entre miembros de la Coalición e ingenieros de HQ, entre ciudadanos y diputados, algunos Ministros e incluso con el Primer Ministro Lucien Bouchard. En junio de 2002, el último decreto gubernamental permitió terminar la línea Hertel-Des Cantons. Este decreto es en realidad una carta blanca a la empresa HQ para terminar los trabajos, que tenían un retraso de un año. A pesar de un dictamen contrario y negativo de la última comisión del BAPE encargada de evaluar el proyecto y sus impactos ambientales, el Gobierno de Quebec decide firmemente poner punto final a la controversia sobre la gestión de esta crisis natural.

⁵ Extracto de la entrevista realizada el 8 de marzo de 2004

con M. Jacques Laval, antiguo Presidente de la CCVSF.

En conclusión, la controversia que rodeó la construcción de la línea Hertel-Des Cantons habría podido continuar aún largo tiempo. En nuestro estudio de caso, presentamos una visión más moderada de la democratización de “lo que está en juego” en el plano tecnocientífico lo que permite una comprensión de las dinámicas políticas inscritas en la sociedad del riesgo.

5. CONCLUSIONES

En este texto se demuestra que una iniciativa ciudadana, activada en el contexto de un conflicto medioambiental, parecía iba a participar en el proceso de reconfiguración de lo político, con el cambio en el plano de la sub-política, ámbito desde el cual los ciudadanos podían desafiar la legitimidad del Estado. Es importante destacar que a la luz de los datos expuestos, los ciudadanos se apropiaron del discurso tecnocientífico. A partir de ello, estuvieron en condiciones de hacer valer su opinión frente a los tomadores de decisiones y, en consecuencia, tener voz en el conflicto. Sin esta primera etapa, el cambio en el ámbito de la sub-política habría resultado imposible.

Como contrapartida, la firmeza con la cual el Estado administró la crisis natural devuelve a la urgencia de reconsiderar la relación que las sociedades postindustriales tienen con el progreso, el crecimiento económico y la política. Aún cuando en este caso la presencia ciudadana parecería no haber sido tomada en cuenta, la presencia de los ciudadanos en las deliberaciones favorece el cuestionamiento de la autoridad, o incluso de la legitimidad oficial, que en el concepto de democracia dialógica de Callon, Lascoumes y

Barthes representa una herramienta para renovar la visión de la política en las sociedades occidentales.

Todo ello haría pensar sobre el peso que tienen diversos desafíos climáticos y medioambientales que están en la agenda internacional. En el caso del gobierno de Canadá, éste enfrenta grandes desafíos en materia de medio ambiente, cruciales en la región del Gran Norte, especialmente rico en recursos energéticos y mineros, lo que sugiere grandes riesgos en el plano geopolítico. En dicho contexto, es evidente que los conflictos medioambientales que surgen en el plano nacional entre el gobierno canadiense, las administraciones territoriales, así como las comunidades *Inuits* que sufren los efectos del calentamiento climático adquirirían nuevos rangos de importancia.

Por otra parte, es posible imaginar que otros conflictos opondrán actores políticos e institucionales, nacionales y supranacionales, o en otro plano de esta misma reflexión, opondrán a representantes de la sociedad civil local y global. En las democracias postindustriales, la comprensión del impacto de estos conflictos —actuales y futuros cuyo alcance es global—, exigen herramientas conceptuales novedosas, como sería el caso de aquéllas utilizadas aquí, entre otros, el concepto de la sub-política, en el centro de la definición de la sociedad del riesgo.

En el futuro, el control del discurso tecnocientífico (o incluso de cualquier otro discurso producido por “expertos”) es *necesario* para el cuestionamiento actual de la legitimidad del Estado y lo que ello representa, debido a la naturaleza de los impactos que tienen dichas decisiones y por su carácter vital en contextos de gestión de crisis o de conflictos medioambientales.

BIBLIOGRAFIA

- BACQUÉ, M. H. & H. REY & Yves SINTOMER (2005): *Gestion de proximité et démocratie participative : une perspective comparative*, La Découverte, Paris.
- BARNES, S. & M. KAASE & K. R. ALLERBECK & al. (1979): *Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies*, Sage, Beverly Hills.
- BECK, U. (1986): *Risikogesellschaft*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2001 (version française, BERNARDI, L.: *La société du risque: Sur la voie d'une autre modernité*, Éditions Flammarion, Paris (2001)

- BUREAU D'AUDIENCES PUBLIQUE SUR L'ENVIRONNEMENT (2000): *Rapport d'enquête et d'audience publique: Ligne à 735 kV Saint-Césaire-Hertel et poste de la Montérégie*, BAPE, Québec
- CALLON, M. & P. LASCOUMES & Y. BARTHE (2001): *Agir dans un monde incertain, Essai sur la démocratie technique*, Éditions du Seuil, Paris.
- CLARK, T. N. & V. HOFFMAN-MARTINOT (1998): *The New Political Culture*, Westview Press, Boulder, Co.,
- CLARK, T. N. & M. REMPEL (1997): *Citizen Politics in Post-Industrial Societies*, Westview Press, Boulder, Co., 1997

- COALITION DES CITOYENS DU VAL SAINT-FRANÇOIS (1998): *Une solution d'urgence pour une situation d'urgence*, Annexe présenté à la Commission Nicolet, CCVSF, Québec.
- COMMISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CHARGÉE D'ANALYSER LES ÉVÉNEMENTS RELATIFS À LA TEMPÊTE DE VERGLAS SURVENUE DU 5 AU 9 JANVIER 1998 (1999): *Pour affronter l'imprévisible : Rapport de la Commission*, Commission Nicolet, Québec.
- FRANCOEUR, L. G. (1998): "Ligne Hertel-Des Cantons : Le comité Blanchette blâme Hydro de ne pas avoir choisi un tracé de moindre impact", en: *Le Devoir*: 31 octobre 1998: pp. A8.
- (2001): "La ligne Hertel-Des Cantons: Le BAPE renvoie Hydro-Québec faire ses devoirs", en: *Le Devoir*: 27 janvier 2001: p. A3.
- HYDRO-QUÉBEC (1999): *Rapport d'avant-projet, Boucle montérégiennne : Ligne à 735 kV Saint-Césaire-Hertel et poste de la Montérégie à 735-120/230 kV*, Volume 1 et Volume 3 : Annexes, Hydro-Québec, Montréal.
- & TRANSÉNERGIE (1998): *Informe Warren: Rapport du Comité d'experts mandaté par le Conseil d'administration d'Hydro-Québec sur la tempête de verglas de janvier 1998*, Hydro-Québec, Montréal.
- LAGADEC, P. (2000) "Tempête de verglas —Québec, janvier 1998", en: *Préventique—Sécurité*, no. 49: Éditions Préventique, Bordeaux .
- MCADAM, D. & J. D. MCCARTHY & M. N. ZALD (1996): *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996
- NORRIS, P. (1999): *Critical Citizens: global support for democratic government*, Oxford, Oxford University Press.
- (2001): *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*, Cambridge University Press, Cambridge.

ABREVIATURAS

- BAPE: Bureau d'audiences publiques en environnement.
- CCVSF: Coalition des citoyens du Val Saint-François.
- HQ: Hydro-Québec.
- PDG: Président-directeur général.